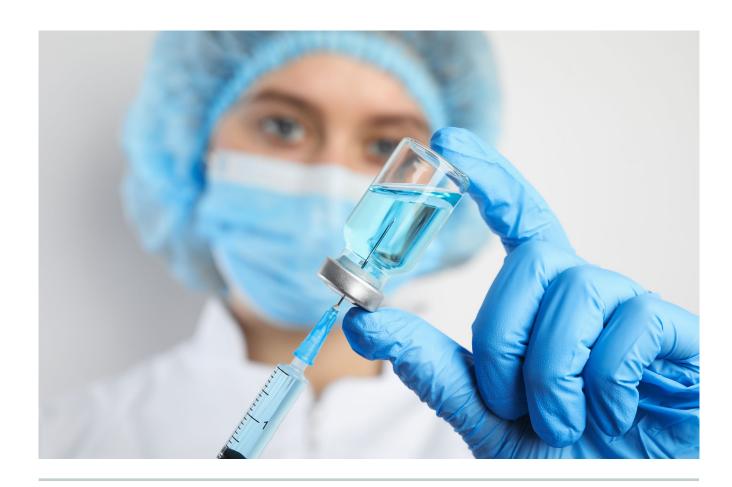
El verdadero rol del sector privado en el plan de vacunación

Gustavo Morales, presidente ACEMI

En el diseño del plan de vacunación COVID-19, el gobierno tomó decisiones difíciles, pero siempre apoyándose en el sector privado en salud. Ojalá se le inyecte más sector privado, y no menos, a lo que resta del plan.

Han transcurrido ya las primeras semanas de la etapa masiva de implementación del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, y los resultados han sido positivos en términos de orden y fluidez de este complejo proceso logístico. Este Plan se construyó por parte del Ministerio de Salud, entre finales de 2020 y principios del 2021, con base en la mejor ciencia disponible, y tiene algunas características que me propongo subrayar en esta nota. Se renunciaron a algunas cosas para lograr otras y se construyeron los procesos a partir de la estructura existente del sistema de salud. Veamos:

Su objetivo es reducir las muertes: El Plan intenta conciliar la disponibilidad restringida de vacunas con la meta primordial de salvar el mayor número de vidas. El hecho de que este, y no otro, fuera el objetivo prevalente, llevó a Colombia a preferir por un Plan que vacuna primero a las personas de más alto riesgo de morir por causa de de COVID, por contraste con otros países que, enfrentados a la misma restricción inicial en el número de vacunas, optaron por priorizar, por ejemplo, a los trabajadores esenciales de la economía, o a quienes más propagaban el virus. Colombia se decidió por una tesis cautelosa, basada en el hecho



de que no existe aún evidencia científica contrastada (aunque sí indicios fuertes), que demuestren que el vacunado no transmite el virus. Y reactivar la economía también es un objetivo loable, pero no es posible que coexista con el de salvar las vidas en mayor nivel de riesgo. O lo uno, o lo otro, dada la escasez.

Predominó la equidad sobre la eficiencia: Se tiene la percepción de que en las grandes ciudades han llegado menos vacunas de las deseables. Pero al momento de escribir estas líneas, hay al menos algunas vacunas en más de 950 municipios del país. Un sistema metódico, que distribuye todas las vacunas que van llegando, atendiendo criterios de equidad geográfica y poblacional, necesariamente sacrifica la eficiencia (¿No es acaso más rápido dispensar todas las vacunas disponibles en una gran ciudad, para así inocular en

→ El 90% de la dispensación de las vacunas lo realizarán prestadores privados.

pocos días a un número mayor de personas?) pero logra esparcir este bien público de una manera que permite que sus beneficios lleguen a todo el territorio nacional. Para usar una metáfora que ha sufrido gran desgaste reputacional en Colombia, digamos que el Plan opta por esparcir la mermelada, así sea muy delgada la capa que se produce, en todos los milimetros de esta tostada que es el mapa de Colombia.



● El Plan intenta conciliar la disponibilidad restringida de vacunas con la meta primordial de salvar el mayor número de vidas.

Gustavo Morales, presidente ACEMI

Muchas decisiones fueron determinadas por los organismos de control: El consenso unánime entre todos los analistas en el sentido de que la forma en que operan los organismos de control le ha hecho grande daño al país, y en nada ha servido para reducir la corrupción, quedó palpablemente validado con el proceso de diseño e implementación del Plan de Vacunación contra el COVID-19. En Colombia no fue posible comprar vacunas antes de que culminaran los estudios clínicos más rigurosos, por temor a que, si estos llegaban a la conclusión de que la vacuna no era segura ni eficaz, se habría dado un "detrimento patrimonial", con lo cual pasamos a una parte muy trasera de la fila, una fila numerosa que procura hacerse a un recurso aun muy escaso. Buena parte de los engorrosos protocolos, firmas, trámites, cargues de información, contenidos en el Plan no obedecen a la obsesión por vacunar rápidamente al mayor número de personas, sino a la obsesión (plenamente justificada) de funcionarios honestos por no correr riesgos patrimoniales, profesionales o reputacionales innecesarios ante dichos organismos.

El Plan se construyó a partir de las capacidades existentes en el sistema de salud: En el papel, las tareas propias de la contención y mitigación de amenazas de salud pública corresponde a las autoridades sanitarias públicas, especialmente las territoriales. Pero desde el inicio de la pandemia quedó claro, con el tema de la toma de muestras y la práctica de pruebas diagnósticas, que esa parte de la institucionalidad sanitaria nacional no iba a dar abasto. Después de unas primeras semanas en las que se quizó monopolizar la toma de muestras, las pruebas y el rastreo en los laboratorios públicos, quedó claro que se estaba desestimando la capacidad de la red privada, prestacional y de aseguramiento, para colaborar en esa tarea.

En buena hora, al diseñar el Plan de Vacunación, el Gobierno optó por aprovecharse de las capacidades construidas durante décadas en el sistema de salud: las públicas, pero esencialmente las privadas. Y es por ello que el 90% de la dispensación de las vacunas

lo realizarán prestadores privados, con el apoyo administrativo en agendamiento y reembolso de aseguradoras –las EPS-, que son mayoritariamente privadas.

No es posible imaginar a las 38 Secretarías de Salud, operando sólo con su red pública hospitalaria, en capacidad de agendar las miles de citas, y cumplirlas con eficiencia, en lugares dignos y adecuados, al menos no en el volumen requerido. Hizo bien el Gobierno en definir que el agendamiento de las citas lo hiciera la red prestadora privada, con el apoyo de las EPS, porque eso es lo que vienen haciendo desde hace décadas.

Todo lo cual me lleva al último punto, a manera de conclusión:

El sector privado juega ya un papel esencial: Se discute por estos días la posibilidad de que el sector privado apoye al Gobierno comprando y distribuyendo vacunas de manera directa, como complemento al plan actualmente en ejecución. Pero no es correcto abordar esa discusión sin reconocer que el Plan en curso, que supone la disponibilidad de vacunas compradas por el Gobierno, ya depende, de una manera crucial, del sector privado.

Es el sector privado, obviamente, el que desarrolló y fabrica las vacunas, y las pone en el mercado tras estudios clínicos rigurosos que se realizaron a través de una red global de entidades también esencialmente privadas; es el sector privado el que transporta el producto, lo almacena, y lo distribuye a todo el territorio nacional; son entidades principalmente privadas las que, en el tramo final, inyectan la vacuna en el brazo de cada habitante apto para recibirla; y son entidades privadas —

las EPS-, las que apoyan en la muy difícil logística de la localización de los destinatarios, el contacto con ellos, el agendamiento de la cita, el control farmacológico posterior y los trámites administrativos para que las entidades dispensadoras reciban una contraprestación por esta labor vital. ¡Todo para lograr que la vacuna sea gratuita en punto de atención, como debe ser!

Existen personas que se incomodan con la presencia del sector privado en situaciones tan marcadamente caracterizadas por ser de interés público. Muy por el contrario, me atrevo a decir que quizá al Plan Nacional de Vacunación le falta más sector privado, no menos. Si, por ejemplo, no existiera la absurda regla según la cual las EPS régimen subsidiado tienen que contratar más de la mitad de su gasto en salud con la red pública, tendríamos más prestadores privados llegando a más rincones del territorio nacional, más rápido y con más eficiencia. Si no existieran las restricciones a la innovación y a la competencia que se derivan, a su vez, de las restricciones a la integración vertical en salud, quizá habrían fluido de mejor manera las interoperabilidades necesarias para el agendamiento y el control de las citas.

Asi las cosas, el debate en torno a la posibilidad de que los actores privados compren vacunas es importante, y desde ACEMI apoyamos esa alternativa; pero es un debate secundario. El principal debate es sobre cómo hacer para que el Plan en curso se beneficie aún más de las fortalezas ya existentes del sector privado, en apoyo de una política pública, y puedan, dentro de su marco, desatarse aun más las esencias de la competencia, la innovación y la eficiencia, que hasta ahora, timidadamente, han mostrado sus bondades.